

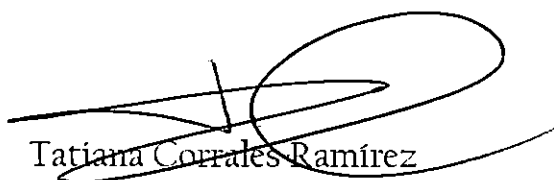
JUZGADO PRIMERO CIVIL EL CIRCUITO DE ORALIDAD DE
ENVIGADO (ANTIOQUIA)

Traslado Secretarial

Se da traslado a la parte demandada, por el término de tres (3) días, del recurso de reposición frente al auto del 4 de febrero del año 2020 (art. 319 del C. G del P.).

En lista: 1º de julio de 2020

Vence: 8 de julio de 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' or 'R' shape with a horizontal line crossing it.

Tatiana Corrales Ramírez

Secretaria

SEGUNDO: Disponer, en el evento de que esta sentencia no fuere impugnada, el envío del expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

NOTIFÍQUESE

GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

45



REPUBLICA DE COLOMBIA
Rama Judicial

Auto interlocutorio	049
Radicado	052663153001-2014-00600-00
Proceso	Ejecutivo
Demandante (s)	Bancolombia S.A
Demandado (s)	Diana María Hincapié Cadavid y otro
Tema	Niega terminación actuación por desistimiento tácito.

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE ENVIGADO

Cuatro de febrero del año dos mil veinte

Se procede a decidir sobre la aplicación del desistimiento tácito en este proceso ejecutivo de Bancolombia S.A. contra Diana María Hincapié Cadavid y Fernando Londoño Naranjo

CONSIDERACIONES:

Dispone el ítem b) numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, que si “... *el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años*”, para decretar el desistimiento tácito.

Parecería sencilla la aplicación de este precepto al caso que nos convoca, sino fuera porque tal disposición encarna una fragante violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, pues la parte demandante ya cuenta con una sentencia a su favor, proferida por la jurisdicción y, como tal, debe gozar de inmutabilidad, de total eficacia, en razón de estar provista de presunción de verdad o acierto.

Nuestro máximo Tribunal de Justicia Constitucional, en sentencia C-543 del año 1992, respecto al principio de cosa juzgada señaló que “*conficre a las*

providencia la fuerza de verdad legal dentro del ámbito individualizado del asunto litigioso resuelto, se funda en el principio de la seguridad jurídica, la cual para estos efectos, reside en la certeza por parte de la colectividad y sus asociados en relación con la definición de los conflictos que se llevan al conocimiento de los jueces” y que “no puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que garantice a la sociedad certidumbre sobre el sentido último de las decisiones judiciales, o, como dice RADBRUCH, un “orden superindividual (...) para dotar prácticamente a la vida social de una instancia decisiva”, es decir, la plena conciencia en torno a que los juicios lleguen a su fin mediante resoluciones fijas y estables que precisen el derecho. La actividad de la jurisdicción no puede moverse eternamente en el terreno de lo provisional. El punto final, después de agotados todos los momentos procesales, se erige en factor insustituible de la convivencia, en cuanto implica la consolidación real del criterio de justicia”.

En esa medida, entonces, la normativa comentada, riñe abiertamente con principios constitucionales como la seguridad jurídica, la justicia, la tutela judicial efectiva y la convivencia pacífica, razón por la cual se impone su inaplicación por contrariar la Carta de Derechos.

En auto 257 del 4 de agosto del año 2015, la Sala Unitaria de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín, se pronunció sobre la improcedencia del desistimiento tácito cuando existe sentencia en firma o auto que ordena seguir adelante con la ejecución, de la siguiente manera:

“En Colombia no hay una posición de la doctrina y la jurisprudencia que sea unánime acerca de qué el principio y la garantía de la cosa juzgada pueda operar en los procesos ejecutivos, pues mientras algunos piensan que sí, otros piensan que no, materia que de todas maneras encuentra regulación legal en los artículos 333 y 512 del C. de P. Civil, lo

que impone una interpretación sistemática y armónica, vía a través de la cual el Tribunal podrá llegar a la conclusión de que tanto en los procesos ejecutivos en donde no se alegaron excepciones de fondo, como en los que si se propusieron, la decisión interlocutoria o la sentencia que se profiera hará tránsito a cosa juzgada formal y material, siempre y cuando sean de aquellas que decidan situaciones no susceptibles de ser modificadas mediante proceso posterior, ya que expresa autorización de la ley, ora por la naturaleza misma de ellas, o simplemente porque son de las que no pueden resolverse dentro del proceso ejecutivo, porque requieren de un trámite ordinario o las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar un proceso posterior.

El artículo 512 del C. de P. Civil prescribe que la sentencia que resuelva las excepciones de mérito hace tránsito a cosa juzgada, excepto en el caso previsto en los numerales 3º y 4º del artículo 333, esto es, las que decidan una excepción de carácter temporal o cuando se profiera un fallo inhibitorio; lo que no traduce que las sentencias que se profieran con base en el artículo 510 del Cpc produzcan apenas efectos de cosa juzgada formal y no material, pues dichos preceptos hay que armonizarlos con el artículo 380 ibídem, que consagra las causales de revisión, mismas que se tipifican como excepciones a la cosa juzgada material, como también lo es hoy día la acción de tutela frente a la vía de hecho, y sin que por ninguna parte aparezca enunciado que las sentencias o los autos que ordenan seguir adelante la ejecución no sean pasibles de dicho recurso bajo el entendido que no participan del principio de cosa juzgada, cuando la verdad es que por anatomía el recurso de revisión es aplicado a los procesos ejecutivos, mismos que no gozan del recurso extraordinario de casación (...).

“(...) el desistimiento tácito frente a los procesos ejecutivos con sentencia ejecutoriada o auto que ordena seguir adelante con la ejecución no es posible, toda vez que existen dos razones de axial importancia,

vinculándose la primera con el principio de la cosa juzgada, entendida su cualidad inherente a las sentencias ejecutoriadas, por lo cual aquéllas resultan inmutables, inimpugnables y obligatorias, haciendo que el asunto sobre el cual ellas deciden no pueda volver a debatirse en el futuro, ni dentro de otro entre las mismas partes y que persiga igual objeto; y, en segundo lugar, dada la posibilidad que ofrecen los procedimientos ejecutivos que una vez en firme la sentencia, el trámite subsiguiente pueda ser efectuado por ambas extremos de la controversia, así como parte del juez que en virtud de los deberes que le impone un Estado Social y Constitucional de Derecho, ha de ser director del proceso, exceptuándose solamente aquéllos hipotéticos casos en que la actuación procesal esté atribuida en forma exclusiva a la parte ejecutante”.

Analizado el caso bajo estudio, se observa que este proceso tiene providencia que ordena seguir adelante con la ejecución, desde 2 de octubre de 2015, la que hizo tránsito a cosa juzgada, por lo que negará la solicitud elevada por el Doctor Fernando Londoño Naranjo, en nombre propio y como apoderado judicial de la codemandada Diana María Hincapié Cadavid, conforme al poder conferido.

Por lo anteriormente anotado, el Juzgado

RESUELVE:

PRIMERO: Negar la solicitud de terminación por desistimiento tácito correspondiente al proceso de Bancolombia S.A. contra Diana María Hincapié Cadavid y Fernando Londoño Naranjo.

AUTO INTERLOCUTORIO 049 RADICADO. 2014-00600-00

SEGUNDO: Téngase por revocado el poder conferido al doctor Carlos Eduardo Peralta Gómez, por Fernando Londoño Naranjo,

Reconócese al último en mención, como apoderado judicial de la señora Diana María Hincapié.

TERCERO: Declarar terminada la actuación del curador *ad litem*, que venía representando a la señora Hincapié Cadavid.

NOTIFIQUESE

GERMÁN ALONSO FLÓREZ HINCAPIÉ
JUEZ

22

CERTIFICO

Que el auto anterior fue notificado en estado No. 015, fijado hoy en la Secretaría del Juzgado a las 8 a.m.

Envigado, febrero 05 de 2020

Tatiana Corrales Ramírez
Secretaria

Señor

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD

Envigado Antioquia.

ASUNTO: Recurso de Reposición y en subsidio Apelación

PROCESO: Ejecutivo

DEMANDANTE: Bancolombia S.A.

DEMANDADO: Diana María Hincapié Cadavid y Fernando Londoño Naranjo

RADICADO NRO.:052663153001-2014-00600-00

FERNANDO LONDOÑO NARANJO, mayor de edad y con domicilio en Sabaneta Ant., abogado titulado y en ejercicio, identificado como aparece debajo de mi firma, actuando en causa propia y como apoderado de la señora **DIANA MARÍA HINCAPIÉ CADAVID**, con cedula de ciudadanía N° 42.767.913 de Itagüí (ANT), por medio del presente escrito me permito hacerle saber que interpongo recurso de **REPOSICIÓN** y en subsidio **APELACIÓN**, en contra de su providencia (**AUTO N° 049**), proferida el 4 de febrero de 2020 y notificada por estados el 5 de los mismos, mediante la cual se me negó la solicitud que hice de decretar el desistimiento tácito dentro del proceso de la referencia, lo que hago con base en los argumentos que a continuación expongo:

El literal b) del numeral 2º del artículo 317 del Código General del Proceso, indica expresamente que se decretará el desistimiento tácito "Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de (2) años".

Considera el Juzgado que la norma mencionada encarna una flagrante violación al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, pues la parte demandante ya cuenta con una sentencia a su favor, proferida por la jurisdicción y, como tal, debe gozar de inmutabilidad, de total eficacia, en razón de estar provista de verdad o acierto; que dicha normativa riñe abiertamente con principios constitucionales como la seguridad jurídica, la justicia, la tutela judicial efectiva y la convivencia pacífica, razón por la cual se impone su inaplicación.

Contrario a lo que opina el Despacho y con todo el respeto que el mismo me merece, difiero del concepto del señor Juez.

Con la vigencia del Código de Procedimiento Civil y todas las normas procesales anteriores a él, en el que los procesos se llevaban por procedimientos netamente escriturales, era imposible pensar siquiera en la posibilidad de que proferida una sentencia y encontrándose ella ejecutoriada, se pudiera decretar el desistimiento tácito del proceso; no en vano, la jurisprudencia que cita el señor Juez del Honorable Tribunal Superior de Medellín, Sala Civil, está sustentada, toda ella, en normas del Código de Procedimiento Civil.

Sin embargo, ese sistema escritural ya es obsoleto en nuestro derecho, ahora se implementó el sistema oral, el cual propende porque los procesos no se vuelvan eternos, porque en nuestros Juzgados no se vuelvan a encontrar procesos con 20 o 30 años de iniciados, y a ello se encuentra encaminado el Código General del Proceso desde su Título Preliminar, título en el cual todas las normas está dirigidas a que en nuestro país el proceso se tramite con todas las garantías para las partes, pero siempre con celeridad, por ejemplo no es sino mirar el artículo 2º del Código que dice: Toda persona o grupo de personas tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses, con sujeción a un debido proceso con duración razonable. Los términos procesales se observarán con diligencia y su cumplimiento injustificado será sancionado" (subrayas fuera del texto); si será

razonable que un proceso que ya tiene sentencia o auto de seguir adelante la ejecución, con bienes embargados, se quede dos (2) años sin trámite alguno porque la parte demandante lo ha abandonado y no quiere, o se le olvidó, continuar con el trámite del mismo.

Y ni qué decir de lo señalado en el artículo 5º del Código citado: "El juez deberá programar las audiencias y diligencias de manera que el objeto de cada una de ellas se cumpla sin solución de continuidad. No podrá aplazar una audiencia, ni suspenderla, salvo por las razones que expresamente autoriza este Código".

Y todas las demás normas del Código General del Proceso conducen a eso, a que el proceso judicial no sea eterno, no siendo justificable de ninguna manera, en un proceso oral, que la sentencia o el auto de seguir adelante la ejecución se dicte en no más de seis (6) meses, pero que la ejecución de dicha decisión se quede en vilo por dos (2) o muchos más años, con el perjuicio que ello conlleva a los intereses de quien es demandado, especialmente cuando tiene inmuebles de su propiedad sujeto a medidas cautelares.

En mi concepto, la norma procesal, que entre otras cosas es de orden público, que permite aplicar el desistimiento tácito a los procesos que tienen sentencia o auto ordenando seguir adelante la ejecución, se ajusta exactamente a todo lo que es el proceso oral que trae el Código General del Proceso, dicha norma desarrolla todo el objeto del mismo y la intención del legislador y se debe aplicar valorándose en armonía con todo el Código, pues debemos recordar que la aplicación de la ley exige una valoración completa de los componentes históricos, económicos y sociales en los que ella se desarrolla.

Será que hay seguridad jurídica cuando en un proceso ejecutivo se dicta auto de seguir adelante la ejecución, dentro del mismo hay bienes embargados, y por desidia, pereza, abandono, desinterés, o cualquiera otra situación, la parte

demandante no realiza las actuaciones necesarias para poner fin al mismo, y dicho proceso se queda durante años en la estantería del Juzgado por tal razón.

La consolidación del derecho de justicia en un proceso civil se da en el momento en que la sentencia o el auto de seguir adelante la ejecución quedan ejecutoriados, en ese momento quedó el asunto resuelto y se consolidó el derecho, pero ese derecho es para ejercerlo y más en un proceso oral, sino se ejerce dentro de un término razonable, y dos (2) años es más que razonable, considero que no es inconstitucional declarar el desistimiento tácito, y no habrá violación al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, no, lo que habrá será el cumplimiento a un modelo de justicia, el oral, que propende por la erradicación de los procesos judiciales eternos.

Considera entonces señor Juez, que la decisión tomada por usted se debe reponer y, en caso de que usted considere que mis argumentos no son suficientes para ello, le ruego concederme el recurso de apelación.

Atentamente,



FERNANDO LONDOÑO NARANJO

C.C. 70.547.458 de Envigado (Ant)

T.P. 167.601 C.S.J.

Fernando Londoño

10 FEB'20 1:24PM

21 F

Don W

Kaen (R)

11/02/2020